PRISIONES Y SISTEMAS PENITENCIARIOS

SUMARIO: I- INTRODUCCION HISTORICA. II- SISTEMAS PENITENCIARIOS. III- BREVE REFERENCIA A ESPAÑA. A- HISTORIA. B- SISTEMA VIGENTE. IV- ARQUITECTURA PENITENCIARIA. V- CUMPLIMIENTO DE LA PENA : DOCTRINA PAROT. SUCINTO ESTUDIO. VI- LOS PERMISOS DE SALIDA. VII- EPILOGO

INTRODUCCION HISTORICA:

Se hace necesario comenzar con una somera referencia a la evolución de lo que han sido las prisiones y sistemas penitenciarios a lo largo de la historia.

En la antigüedad, los delincuentes no ingresaban en las cárceles para cumplir una condena, sino para su reclusión temporal o indeterminada, a veces en espera de la ejecución de penas capitales, corporales o pecuniarias. El concepto de cumplimiento de condenas es más moderno.

Para los Derechos antiguos y los ordenamientos de la Edad Media, la prisión era un lugar de retención. En muchas ocasiones el ingreso se producía por la mera arbitrariedad de los gobernantes o príncipes, y con sometimiento a trabajos forzados o con carácter preventivo previo a la aplicación de castigos corporales aberrantes, o a la pena de muerte. Las prisiones eran lugares inmundos, de hacinamiento, inhumanos.

En el antiguo Egipto, existían las prisiones de Estado, donde se ingresaba a los presos del faraón, que podían ser sometidos a trabajos públicos o en las minas.

En Grecia, sorprende que Platón fuera partidario del encierro de por vida a todo delincuente, aunque por otra parte en su obra Las Leyes llegó a contemplar la cárcel como una forma de corrección.

En Roma, las cárceles se ubicaban en subterráneos, siendo también un medio coercitivo para deudores y esclavos. Sin embargo, el emperador Constantino (siglo IV) llevó a cabo una reforma carcelaria prohibiendo los rigores innecesarios con los presos, ordenando que los que fueran pobres fuesen alimentados a cargo del Estado, y que en las prisiones se construyese un patio al aire libre para uso de los reclusos.

En Arabia, bajo la influencia del Corán, las cárceles se empleaban entre otros supuestos para ingreso de las mujeres adúlteras y los autores de delitos contra la religión. El califa Omar, segundo sucesor de Mahoma, acordó que quienes no pagaban sus impuestos fueran ingresados en prisión, con lo que podría decirse que en cierto modo se contemplaba el delito fiscal.

Durante la Edad Media, la cárcel era un medio de custodia para los delincuentes hasta la ejecución de la pena impuesta, como azotes, torturas, mutilaciones o muerte, siendo una de las más crueles la cocción en calderas, también utilizada por los mongoles. Las cárceles eran calabozos subterráneos, sin la menor preocupación por la higiene, utilizándose en ocasiones los sótanos y mazmorras de fortalezas como la Torre de Londres, la Bastilla de París o el Palacio Ducal de Venecia.

Es a finales del siglo XV o principios del XVI cuando las cárceles poco a poco van adoptando la función de cumplimiento de la pena, aunque subsistiendo con castigos corporales, o el destierro a las colonias americanas, así como la ejecución de trabajo obligatorio, que no se retribuía a los penados, sino que su producto iba destinado básicamente al pago de los carceleros cuando no a las arcas de reyes y Estados. En la cárcel de Bruselas, los presos se dedicaban a la manufactura del papel, por ejemplo, y en las prisiones alemanas, a fortificar las calles. En la mitad del siglo XVI en las cárceles de Amsterdam los reclusos se dedicaban a raspar maderas para la obtención de colorantes, y las mujeres hilaban lana y terciopelo. El trabajo obligatorio se conseguía mediante azotes, latigazos u otros castigos corporales, siendo de destacar la llamada celda de agua, que consistía en su inundación continua, debiendo el penado achicar aquella mientras continuaba fluyendo hasta conseguir salvarse o perecer ahogado.

No cambia básicamente el panorama durante la etapa absolutista. Continúan las torturas, sobretodo para arrancar la confesión al reo, éste carecía de una defensa adecuada y la higiene en las cárceles continúa brillando por su ausencia. Sin embargo, cabe destacar que en España, en los siglos XVI y XVII comenzaron a emplearse camas en las celdas (lo cuál no significó una mayor salubridad) y a autorizarse visitas carcelarias.

La época de la Ilustración hace surgir nuevas ideas que, basadas en el Derecho natural y en la razón, combatieron la arbitrariedad y el despotismo defendiendo la capacidad rehabilitadora de la pena.

Es a partir de mediados del siglo XVIII cuando tanto el inglés John Howard como el italiano Cesare de Beccaría proponen medidas para su humanización y la implantación de un Derecho penal respetuoso con la dignidad del individuo, propugnando una organización seria del trabajo en las prisiones, y el derecho de los penados a un régimen sanitario y alimenticio higiénico adecuado, lo que conecta con las ideas del Iluminismo acerca de la supresión de la tortura y castigos corporales. Howard, en su obra "The state of prisons of England and Wales" describe el horroroso estado de las prisiones europeas, que visitó sin descanso, tanto es así que murió de peste mientras visitaba las prisiones de Ucrania, enfermedad propia de los centros penitenciarios de la época.

SISTEMAS PENITENCIARIOS:

A finales del Siglo XVIII surge en EE UU, el llamado sistema celular o filadélfico, implantado por los cuáqueros, una comunidad religiosa disidente y

perseguida, con ideas próximas al cristianismo primitivo fundada en Inglaterra por George Fox en el siglo XVII y que se extendió en Estados Unidos en el estado de Pensilvania durante el siglo XVIII.

Los cuáqueros (cuya denominación viene de la palabra inglesa “quaker”, que significa temblar), en general, defienden la justicia, la vida sencilla, la honradez estricta y el pacifismo. El sistema se basaba en que todo delincuente es susceptible de reforma cuando se le coloca en un medio adecuado, y consistía en un aislamiento total y continuo de los penados. El recluso permanecía aislado día y noche en una celda sin comunicación con los demás penados, basándose el sistema en evitar el aspecto corruptor de las prisiones y lograr mediante el aislamiento y la meditación, la corrección del reo. El trabajo también lo realizaban en la propia celda. Este sistema, no se acomodaba a los más elementales patrones psicológicos humanos, esto es la sociabilidad por naturaleza, llegando a resentirse la salud física de los presos seriamente, habiendo crecido de un modo importante el número de dementes. Este sistema se implantó en el penal de Walnut Street de Filadelfia, de ahí su denominación de filadélfico, y en Europa tuvo gran acogimiento en las prisiones de Bélgica. En Francia, fue implantado por Napoleón.

Una alternativa fue el sistema mixto o de Auburn, que se experimentó en la prisión de este nombre sita en Nueva York, y consistía en mantener durante la noche el régimen celular, con trabajos diurnos comunes, pero bajo un régimen de silencio, lo que no dio un mejor resultado.

Cabe citar aquí el sistema implantado en la prisión de Gante en 1755. En dicho Centro, los penados realizaban trabajos durante el día, con aislamiento celular nocturno, gozando de prestaciones como la asistencia médica y educacional, habiéndose mitigado el rigor de los castigos, y realizándose una clasificación de los internos.

Es entonces cuando surgen los sistemas progresivos. Puede decirse que comenzaron a implantarse en Inglaterra en 1840 en la prisión de Pentonville, al Norte de Londres, donde se combinaba en un primer grado un sistema celular durante 18 meses, para posteriormente enviar al preso a las colonias australianas, habiéndose computado en unas 160.000 las deportaciones. Resulta despiadado, por ejemplo, el caso de John Hill que fue condenado a siete años de destierro en Australia por hurtar un pañuelo de lino de 6 peniques. Abolida años después la deportación, el sistema pasó a componerse de tres etapas, la prisión celular durante nueve meses, el trabajo en común en cuatro sesiones progresivas, y la libertad condicional. En Irlanda, Crofton introdujo una variación en el sistema, dividiéndolo en cuatro fases o grados, el tercero de los cuáles los penados viven en la prisión pero trabajan fuera de ella. En nuestro país, el coronel Manuel Montesinos, para algunos el auténtico precursor del sistema progresivo, director del Centro Penitenciario de Valencia desde 1834, persona profundamente humanitaria y filantrópica, dividía la condena en tres períodos llamados de hierros o aislamiento, trabajo a elección del penado entre los que se le ofrecían dentro del establecimiento, el de libertad intermedia, durante el que los penados salían a trabajar en la ciudad, ello a fin de alcanzar la libertad condicional. No puede, finalmente, dejar de mencionarse la figura de Concepción Arenal, que fue la primera mujer que obtuvo el título de Visitadora de Cárceles de Mujeres y escribió obras como Oda a la esclavitud, que obtuvo un premio por la Sociedad abolicionista de Madrid; comprometida con la

doctrina correccionalista, considerando que con independencia de los fines de la pena de expiación y afirmación de la justicia, el primordial debía ser la reforma del delincuente.

El sistema progresivo, ha sido la base de los sistemas penitenciarios actuales.

Sin embargo, un retroceso importante en la progresión del sistema penitenciario lo encarna la Escuela de Kiel, o del Derecho penal de autor, cuyos postulados fueron adoptados por el régimen del III Reich, ya que esta corriente doctrinal defendía el castigo del autor del delito por el mero hecho de serlo, propiciando la vuelta a las penas corporales, y llegando a sostener algún autor la viabilidad de los trabajos (obviamente forzados) como medio para encauzar al disidente hacia la ideología política del Estado. A su amparo se justificaron esterilizaciones, castraciones y lobotomías, dictándose leyes destinadas a quienes no se acomodaban a los cánones raciales arios.

No obstante, no fue dicho régimen el único que aplicó medidas como la esterilización, pues también lo fueron en un país democrático como EE UU, y ello coincidiendo con la epidemia delictiva de los años 20, donde se extendió como la pólvora el hampa y el crimen organizado (es la época de la Ley Seca). Por mucho que se señala como fenómeno aislado, lo cierto es que las esterilizaciones además de aplicables a quienes cumplían condena, se extendieron a otro tipo de personas como alcohólicos u oligofrénicos, llegando a esterilizarse a unas 200.000 personas, ello avalado por las autoridades como el famoso juez Holmes, quien confirmó una ley de Virginia que permitía la esterilización de personas impedidas mentalmente llegando a afirmar que “tres generaciones de imbéciles son suficientes.”

Tras la Segunda Gran Guerra, y como no podía ser de otro modo, surge ya un movimiento, comenzando por la propia ciencia penitenciaria alemana, para desterrar cualquier tesis en la que pudiese apoyarse en el futuro un régimen totalitario, tomando ya carta de naturaleza definitiva la concepción de la reinserción del delincuente, siendo relevantes las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas de 1955, dadas en Ginebra, y del Consejo de Europa de 1973, y destacando la Ley Sueca Penitenciaria de 1974, que de modo notable influyó en varios países europeos, de carácter netamente administrativo-rehabilitador.

BREVE REFERENCIA A ESPAÑA:

A) Evolución histórica

Aludiendo de un modo sintético a España, los primeros precedentes escritos sobre las cárceles se pueden encontrar en la época visigótica, y más tarde en las Partidas de Alfonso X El Sabio, en las que se declara que la prisión no se impone como castigo, sino como medio para guardar a los delincuentes antes del juicio.

En la época de los Reyes Católicos, aparece una preocupación por los excesos que pudieren cometerse en las cárceles, dictándose en el año 1480 una Real Pragmática estableciendo controles periódicos administrativos sobre las autoridades carcelarias, lo

que no impedía la masiva concentración de reclusos y la insalubridad existente en dichos centros, y que en general la normativa no se cumpliera, como ocurriría con las Leyes de Indias protectoras de los indígenas, que eran sistemáticamente transgredidas por los encomenderos, quienes en las haciendas o minas que les eran adjudicadas explotaban a los indios obligándoles a realizar trabajos inhumanos.

En el S. XVII fue famosa la prisión de Almadén (Ciudad Real), en cuyas minas trabajaban los presos, y en el S. XVIII cabe destacar la existencia de presidios, destinados al cumplimiento de penas por delitos graves, y casas de corrección, para delitos menos graves, entre éstas la de S. Fernando del Jarama de Madrid fue muy elogiada por Howard cuando la visitó.

La humanización que conllevaron las ideas iluministas, se hace notar en nuestro país, y así Carlos IV en una Ordenanza de 1804 para presidios de Arsenales de Marina, los divide en clases, siendo en cierto modo un avance hacia el sistema progresivo, y ya se ha aludido al régimen impuesto por el coronel Montesinos en la prisión de Valencia y a la labor realizada por Concepción Arenal.

De todos modos, el proceso de reforma penitenciaria en España, que puede decirse que comenzó en el Siglo XIX, fue largo, llegando a implantarse los distintos sistemas imperantes en países de nuestro entorno, ya referidos, destacando a inicios del Siglo XX sendos Reales Decretos de 1901 y 1902, con la finalidad de la aplicación del tratamiento reformador, seguidos de la Ley de Libertad Condicional de 1914.

Durante la Segunda República, no puede desconocerse la labor humanizadora de la Directora General de Prisiones Victoria Kent, habiéndose dictado disposiciones como la supresión de los grilletes y cadenas, con cuyo metal hizo modelar una estatua de Concepción Arenal, mejorando además la alimentación en las cárceles y permitiendo la libertad de cultos, llegando a cerrar varios centros penitenciarios debido a sus malas condiciones.

El C. Penal de 1944 mantuvo el régimen progresivo, con un primer período de observación de 30 días mínimo en régimen celular, el segundo de trabajo en comunidad y el tercero de readaptación social. Es de lamentar el penoso estado que en ese momento tenían los Centros Penitenciarios, siendo en la década de los 80 cuando se ha hecho un gran esfuerzo para la modernización y edificación de nuevos Centros.

Tras el Reglamento de los Servicios de Prisiones de 1956, ha sido la Constitución de 1978 la que enfoca la cuestión penitenciaria de un modo definitivo desde la óptica del respeto a los derechos fundamentales, proclamando la rehabilitación social.

En esa dinámica, se promulga la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979, y su Reglamento de 1981, sustituido por el actual de 1996.

Para concluir con una breve referencia al centro penitenciario de Oviedo, cabe señalar que desde la Edad Media y hasta el Siglo XIX la prisión de Oviedo se ubicaba en la antigua fortaleza que el Rey Alfonso III había mandado edificar para defender la ciudad de las incursiones de los normandos, sita en lo que hoy es la Plaza Porlier. Al ser

dicho edificio parcialmente destruido por las tropas napoleónicas, se acordó construir otro recinto carcelario en el campo de S. Francisco por la Junta General del Principado.

Haciendo un inciso, ha de recordarse que la Junta General se remonta al año 1388 en el que el rey castellano Juan I constituye el Principado de Asturias, inaugurando su hijo Enrique (luego Enrique III) el título de Príncipe de Asturias. La Junta General disponía de autonomía dentro del reino de Castilla, aunque concretada en facultades administrativas, si bien el centralismo borbónico y absolutista de Felipe V estableció órganos de control, lo que impidió que la Junta proclamase su soberanía declarando la guerra a Napoleón en Mayo de 1808. La Junta estuvo vigente hasta el año 1834, tras la segunda Restauración del absolutismo por Fernando VII, siendo sustituida por la Diputación Provincial.

Pues bien, y continuando con la prisión ovetense, razones de economía determinaron que la nueva prisión se ubicase en su lugar primitivo, procediendo a su reconstrucción. Se intentó en 1838 su traslado al convento de Santa Clara, proyecto que no llegó finalmente a ejecutarse, y no siendo hasta 1887 cuando se procedió a la construcción de la que fue prisión provincial hasta 1992, año de inauguración de la actual de Villabona.

Existió asimismo en Oviedo una prisión de mujeres para delitos menores y hasta el año 1925, instalada en lo que es hoy la plaza de la Escandalera.

B) Sistemas vigentes

Como ya se señaló, el sistema progresivo es el imperante en la actualidad, con lo que resulta obligado, aunque de forma muy sintética, hacer referencia a los distintos tipos de régimen penitenciario en los que conforme a nuestra legislación vigente se han de clasificar los penados.

Se ha de distinguir entre el régimen cerrado, ordinario y abierto también denominados primer grado, segundo grado y tercer grado respectivamente.

Se clasifican en régimen cerrado o primer grado los penados que denoten extrema peligrosidad o manifiesta inadaptación al régimen ordinario. A grandes rasgos, hay que señalar que el régimen cerrado se cumple en Centros o módulos de régimen cerrado o en departamentos especiales, con absoluta separación de dichos penados del resto de la población reclusa, y se caracteriza por una limitación de las actividades comunes de los internos así como una mayor vigilancia y control sobre ellos.

El régimen ordinario o de segundo grado será aplicable a los penados en quienes concurren circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia, pero sin capacidad por el momento para vivir en semilibertad; se aplica asimismo a los internos sin clasificar.

Finalmente, queda reservada la clasificación en régimen abierto o tercer grado a los internos que por su progresión positiva resultan acreedores a un tratamiento en semilibertad, y en este sentido se les permite salir del Establecimiento para desarrollar las actividades laborales, formativas, etc, que faciliten su integración social. En general, el tiempo mínimo de permanencia en el Centro será de ocho horas diarias, debiendo

pernoctar en el Establecimiento, salvo cuando el interno acepte el control de su presencia fuera del Centro mediante dispositivos telemáticos adecuados u otros mecanismos de control suficiente, en cuyo caso sólo tendrán que permanecer en el Establecimiento durante el tiempo fijado en su programa de tratamiento.

Por otro lado, dichos internos disfrutarán de salidas de fin de semana, desde las dieciséis horas del viernes hasta las ocho horas del lunes como norma general. También podrán disfrutar de los días festivos establecidos en el calendario oficial de la localidad donde esté situado el Establecimiento.

Una vez el penado haya ingresado en el Centro Penitenciario para cumplir la condena, y tras los pertinentes estudios, se efectuará la propuesta de clasificación inicial penitenciaria, correspondiendo la resolución definitiva al Centro Directivo (Subdirección de Gestión y Tratamiento de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias). La evolución positiva o negativa en el tratamiento penitenciario del interno, podrá determinar su progresión o regresión de grado.

Ahora bien, cabe preguntarse si resulta posible que un interno sea clasificado inicialmente en el tercer grado, ya que con carácter general, el régimen inicial aplicable es el de segundo grado.

La regla general es que ha de tener extinguida la cuarta parte de la condena, pero sí es posible cuando la misma sea de un año de privación de libertad

Cuestión aparte es el llamado período de seguridad, al que se refiere el art. 36-2 del Código Penal, que faculta, u obliga en casos como delitos sexuales y de corrupción de menores, al Tribunal sentenciador para vetar el acceso al tercer grado al condenado a pena privativa de libertad superior a los cinco años, hasta que cumpla la mitad de la pena impuesta.

BREVE REFERENCIA A LA ARQUITECTURA PENITENCIARIA: EL PANOPTICO

Ya se ha señalado que las cárceles contaban con nulas condiciones de espacio e higiene, y que la época de la Ilustración marcó un nuevo concepto de justicia, produciéndose una mejora de trato y condiciones de vida de los centros penitenciarios.

Durante el siglo XVIII se inició una corriente en la arquitectura penitenciaria con la finalidad de diseñar los centros a fin de brindar al recluso unas mejores condiciones higiénicas y de ventilación.

Comenzando por el modelo de vigilancia intermitente, se caracteriza por la alineación de celdas a lo largo de un corredor, lo que implica que el celador debe efectuar rondas por los pasillos a los efectos de observar la actividad de los internos, con lo cual éstos permanecen sin supervisión durante los intervalos de los recorridos, por lo que las posibilidades de observación son extremadamente reducidas.

Jeremy Benthan, máximo representante del utilitarismo (corriente filosófica que se basa en que ha de hacerse aquello que consiga el mejor estado de las cosas, lo más valioso para los individuos) , introdujo a fines del siglo XVIII y principios del XIX como modelo arquitectónico el concepto llamado panóptico, vocablo que viene de las palabras griegas “pan” (todo) y “opsis” (vista). El objetivo de la estructura panóptica es permitir al guardián, guarnecido en una torre central, observar a todos los prisioneros recluidos en celdas individuales alrededor de la torre, sin que éstos puedan saber si son observados. La estructura es la siguiente: Dentro de un cuadrado amurallado, se ubica una torre, destinada a los inspectores y que ocupa el centro: De dicha torre parten en forma de estrella varias líneas de celdillas, abiertas hacia el interior de un patio y cerradas hacia afuera, de manera que las mismas pueden ser observadas desde la torre, desde donde asimismo el inspector puede hacer las advertencias a los presos y dirigir los trabajos. Dicha torre, está además rodeada de una galería cubierta con una celosía trasparente, que oculta la presencia del inspector. En este tipo de cárceles, se tenían en cuenta medidas de higiene, iluminación y ventilación, siendo los materiales de construcción hierro, cristal y piedra, esto es, incombustibles.

Esta forma de construcción tuvo gran difusión en Europa, y así se puede citar la prisión de Herrmann de Berlín, o la Santé de París, y en España la cárcel Modelo de Madrid, la cuál constaba de un pabellón de entrada donde se ubicaban las dependencias administrativas, ingreso, locutorios, enfermerías, etc y cinco brazos de galerías celulares a confluir en la torre de vigilancia.

La prisión de Oviedo, fue construida con la misma configuración, pero con cuatro brazos en lugar de cinco, formando el quinto el pabellón de administración.

Las prisiones modernas han abandonado esta estructura, en pro de otras formas, básicamente porque se ha evolucionado hacia un sistema en el que las celdas pasan a ser simples dormitorios en pro de una convivencia y relación social cada vez mayor entre los internos, otorgándose cada vez más importancia al trabajo penitenciario y a la libertad de movimientos de los reclusos dentro de los centros penitenciarios.

Por citar uno de los modelos recientes, se puede hacer referencia al sistema de supervisión directa, que se ha aplicado en EEUU, en el que impera el criterio de unidad funcional o por módulos, las celdas se diseñan vinculadas a salas de estar, carpintería de madera, ventanas con vista al exterior y mobiliario liviano. El perímetro de seguridad de las unidades queda envuelto por un perímetro sólido que permite una relativa libertad de movimientos en el interior. Como características de este sistema se pueden destacar:

- a) amplia movilidad del interno dentro del módulo.
- b) alto grado de interacción agente-interno
- c) preciso sistema de clasificación de los internos

Desde el punto de vista de la estructura física el módulo (“Pod”) está conformado por celdas exteriores, agrupadas, junto con otros locales de apoyo, en torno a un espacio central multiuso. Este salón se convierte en el ámbito natural de la relación social de los internos y facilita el contacto de éstos con el agente correccional

CUMPLIMIENTO DE LA CONDENA:

El penado, y ello resulta lógico, intentará utilizar todos los medios legales a su alcance para no cumplir la condena, pues por mucho más adecuados que estén hoy en día los centros penitenciarios, ello conlleva privación de libertad, separación de la familia, del entorno, etc.

Agotados los recursos, y producido ya el ingreso en prisión, ya su continuación como penado si ya estuviere preso preventivo, habrá de practicarse la liquidación de condena, fijándose el tiempo de la misma conforme a la pena impuesta.

Uno de los problemas, que ocurre con más frecuencia de la deseable, es el supuesto en los que al penado se le ha impuesto una pluralidad de condenas, al haber cometido múltiples delitos, sobretodo en los casos en que la suma de aquéllas alcanza cifras desorbitadas, a veces de más de 1.000 años.

En estos supuestos, no puede dejar de hacerse referencia a la doctrina Parot, de reciente actualidad tras la sentencia del TEDH de 12-10-2013.

El revuelo y la confusión que dicha resolución ha provocado en los medios de comunicación, la opinión pública, y las víctimas del terrorismo, resulta de una larga evolución jurisprudencial y legislativa, que de una manera totalmente objetiva y en síntesis se va a tratar de explicar.

Tiene su comienzo en el C. Penal de 1973, fundamentalmente en la regla 2ª de su art. 70, precepto que se refería al supuesto en el que una persona condenada a varias penas privativas de libertad, tuviese que cumplirlas sucesivamente.

El precepto, fijaba un máximo de cumplimiento y lo era el triplo de la pena más grave, con el límite en cualquier caso de 30 años.

El problema que surge es, y en lo que ahora nos interesa, si esos 30 años se transforman en una pena nueva y diferente de las diversas penas que han sido impuestas al reo, o si dichas penas no pierden su autonomía y se van cumpliendo una a una por su orden sucesivo hasta alcanzar los 30 años, momento en que el reo extinguiría todas las que aún no hubiese cumplido. Esta cuestión no tendría relevancia alguna si no existieran los beneficios penitenciarios, y con ellos la posibilidad de reducción de la pena, pues en el primer caso dicha reducción comenzaría a computarse a partir de 30 años, pero en el segundo a cada pena que el condenado hubiese comenzado a cumplir se le aplicarían sus beneficios, de manera que la reducción correspondiente afectaría únicamente a dicha pena individual. El resultado sería que de considerar los 30 años como una nueva pena, el condenado que aprovechara los beneficios penitenciarios no llegaría a cumplir dichos 30 años, pero en el supuesto de mantener cada pena su autonomía propia, sí cumpliría de manera íntegra dichos 30 años.

Nuestros Tribunales habían venido adoptando el criterio señalado en primer lugar, es decir, que los 30 años deberían entenderse como una nueva pena, y esta general interpretación no se abandonó durante todo el tiempo de vigencia de dicho Texto de 1973, Código Penal que fue derogado por el de 1995.

Con este nuevo Código Penal, tampoco se produjo cambio respecto a dicha interpretación. Dicho texto, que suprimió los beneficios penitenciarios referentes a la redención de penas por el trabajo, en su art. 76 contiene una redacción muy parecida, prácticamente idéntica a la regla 2ª del Art. 70 del Código anterior, contemplando como máximo de cumplimiento para el condenado a una pluralidad de penas privativas de libertad el de 20 años, 25 años o 30 años, según los casos.

La Ley Orgánica 7/03 de 30 de junio introduce una modificación en el C. Penal con la finalidad, según se afirma, de que en determinados casos, y básicamente pensando en los delitos de terrorismo, sus autores extingan en su integridad el límite máximo correspondiente al cumplimiento de las penas impuestas, que puede llegar a ampliarse a 40 años.

Expuesto así lo señalado, la sentencia del T. Supremo de 28-2-2006 es la que introduce la doctrina Parot, así denominada por haber sido dictada con ocasión de haber llegado a conocimiento de dicho Tribunal un supuesto de acumulación de condenas impuestas en varios procedimientos al terrorista Henry Parot Navarro, por delitos cometidos entre los años 1978 y 1990. En esta resolución, y siendo aplicable al reo el C. Penal de 1973, lo que hace el Alto Tribunal es interpretar su regla 2ª del art. 70 sin acoger la doctrina de la conversión del límite máximo de los 30 años en una pena nueva, sino decantándose por el segundo de los criterios antes referidos, esto es, la del cumplimiento de cada pena de modo sucesivo, con aplicación a ella en su caso de los beneficios penitenciarios, hasta alcanzar los 30 años de real cumplimiento.

Lo que, por tanto, ha llevado a cabo el Tribunal Supremo con dicha doctrina, no ha sido una aplicación retroactiva de la ley, sino un cambio de criterio jurisprudencial, y obvio es que la Jurisprudencia no tiene en nuestro ordenamiento la cualidad de norma jurídica, no es fuente del derecho, sino que complementa el ordenamiento jurídico por vía interpretativa, tal y como lo expresa el art. 1-6 del C. Civil.

La sentencia del TEDH, sin embargo, lo que viene a señalar y concluir es que dicha doctrina infringió el art. 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, de 4-11-1950, ratificado por nuestro país en el año 1979, que señala que no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida. Al resolver el recurso interpuesto por Inés del Río, condenada a penas que sumaban más de 2000 años, a la que la Audiencia Nacional inicialmente le había fijado la fecha de su excarcelación para el año 2008 por aplicación de los beneficios penitenciarios (ello conforme al C. Penal de 1973 y partiendo de una única pena de 30 años), y le había aplicado posteriormente la doctrina Parot posponiendo la extinción de su condena al año 2017, el TEDH concluye en resumen que la referida doctrina alteró un criterio jurisprudencial consolidado de manera que cuando la recurrente había cometido los delitos y había sido condenada tenía unas expectativas de cumplimiento de la condena, sin que hubiese podido prever en modo alguno dicho cambio en el futuro.

Dicho esto, ¿qué valor he de otorgarse a las sentencias del TEDH? ¿tienen fuerza vinculante y son directamente aplicables por nuestros Tribunales? La cuestión no es tan sencilla.

El Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 dispone que las partes contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean parte. Al ser ratificado dicho Convenio por nuestro país, pasa a formar parte de nuestro derecho interno, lo que no significa que el TEDH sea una instancia superior a los órganos judiciales nacionales, ya que es un órgano internacional, pero no supranacional, no formando parte del Poder Judicial español.

La postura tradicional era la de negar a dichas sentencias fuerza obligatoria directa, reconociendo que nuestro legislador no ha regulado un mecanismo sobre la ejecución de dichas sentencias. El Pleno del TC en sentencia nº 245/91, a pesar de declarar la carencia de fuerza obligatoria, dio un giro señalando que las normas referentes a derechos fundamentales y libertades públicas han de interpretarse de acuerdo con los Acuerdos y Tratados internacionales ratificados por España. A partir de ahí, ha venido imperando cada vez más el criterio de la vinculación.

En el caso de la sentencia en cuestión, el Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del TS reunido el 12-11-2013 adoptó, aunque no por unanimidad, el Acuerdo de dar efectividad a dicha resolución, esto es considerarla directamente aplicable, si bien consideró que el poder legislativo debe regular con claridad el cauce procesal adecuado a dicha efectividad. Dicho Tribunal, a falta de regulación, estimó suficiente la previa audiencia a las partes y al M. Fiscal.

Afirma el Magistrado Sánchez Melgar que la cuestión fundamental, es la forma de la ejecución de los fallos del TEDH, no sólo respecto del supuesto de la sentencia en cuestión, que se ejecutó al día siguiente, sino para los casos semejantes. Distingue a este respecto entre los supuestos que cuentan con una resolución judicial ya firme que haya marcado la fecha de licenciamiento definitivo (extinción de la condena), de aquéllos en los que aún no se ha producido. En éstos, considera que en efecto la doctrina de la sentencia del TEDH sería aplicable directamente, mas en aquéllos estima que el cauce adecuado sería el planteamiento de un recurso e revisión ante el TS, como ya así se había declarado en alguna ocasión, y se ha adoptado en legislaciones de nuestro entorno, como Alemania, Bélgica, Polonia, Reino Unido, Suecia o Suiza.

Así las cosas, y advertido el problema, o al menos pudo ser advertido, ni juristas ni legisladores lo afrontaron en su momento, acaso dejándose llevar por la inercia interpretativa, o por un sentido pietista o por el principio general de favorecer al reo, o por el fin resocializador de las penas. No hubiere sido complicado plantearse si resultaba correcta la interpretación que se venía realizando, o si pudiese suscitar dudas llevar a efecto una modificación legal a fin de disiparlas. Ello tampoco se planteó en el nuevo y ahora vigente C. Penal de 1995, que reproduce sustancialmente la redacción; más aún, la reforma del C. Penal de 30-6-2003 vino a corroborar que el legislador estaba de acuerdo con la interpretación de la única pena, pues de otro modo dicha reforma no hubiere sido necesaria. Tal vez si el legislador hubiere estado más atento en su momento, pues oportunidad hubo, no hubiera sido necesaria la doctrina Parot,

interpretación que por otro lado parece la más acorde con el espíritu del art. 70-2-del C. Penal de 1973.

LOS PERMISOS DE SALIDA:

Una de las cuestiones más polémicas de los sistemas penitenciarios ha sido la referente a los permisos de salida Existe unanimidad entre la doctrina penitenciaria tanto española como extranjera en reconocer que la finalidad última de los mismos es la resocialización del recluso, así, si el mismo, con independencia de su situación, sigue formando parte de la sociedad, y como preparación para su futura vida en libertad, tiene derecho a mantener relaciones con el mundo exterior, en consecuencia podrá fortalecer sus vínculos familiares, y reducir las tensiones de la vida continuada en prisión, siendo ello además un estímulo a su buena conducta dentro del Centro Penitenciario. Ahora bien, no se puede olvidar que además del fin rehabilitador de la pena, ha de cumplirse el fin retributivo de la misma con respecto a la víctima y a la sociedad, de ahí que la retención y custodia del penado constituye igualmente misión de la Administración Penitenciaria, lo que obliga a realizar un serio y exhaustivo estudio de aquél en orden a la concesión del permiso de salida al que pudiere tener derecho, ello a fin de obviar, en la medida de lo posible, el fracaso que pudiere producirse durante el disfrute, básicamente por la no reincorporación del interno al Centro Penitenciario a la finalización del mismo, o por la comisión durante el permiso de alguna infracción penal, máxime si se tiene en cuenta la sensibilidad a veces comprensible de la sociedad hacia este tipo de beneficios, que no siempre ve con buenos ojos.

A pesar de ser éste un beneficio de delicada asunción, lo cierto es que se ha considerado imprescindible a fin de estimular al interno que por su comportamiento se haya hecho acreedor del mismo, afianzando el sentido de su responsabilidad. Cierto es que comporta un grado de riesgo a veces imprevisible, ya que el éxito o fracaso de dicha medida resocializadora depende del comportamiento y disposición individual de cada sujeto, sin embargo hay que decir que ha resultado satisfactorio el progresivo descenso año a año del índice de internos que han quebrantado un permiso de salida, incluso menor que el de otros países de nuestro entorno. Así, los casos de quebrantamiento de permisos de salida en España han ido progresivamente disminuyendo, desde el 0,92% en el año 1995, o el 0,60 en el año 2005, situándose en el año 2012 en el 0,56%, y en 2013 el 0,51%.

La regulación actual de los permisos de salida se encuentra en el art. 47 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y art. 154 y siguientes del Reglamento Penitenciario. Todo ello, se complementa con la Instrucción de 2 de abril de 2012 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Sin embargo, los permisos

penitenciarios de salida no son algo reciente, han venido precedidos de una larga evolución histórica, existen en numerosos ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, e incluso de alguna manera en épocas pasadas.

Así, por poner dos ejemplos, nos encontramos que durante la Inquisición española de hecho ninguna de las sentencias suponía el confinamiento forzoso en una cárcel. De acuerdo con las Instrucciones de 1488, los Inquisidores podían confinar a discreción a un hombre en su propio domicilio, o incluso en un hospital, siendo la principal razón de ello la carencia de espacio en las prisiones, ya que a menudo las celdas estaban llenas y había que buscar alguna alternativa. Con independencia de ello, las prisiones gozaban con frecuencia de un régimen abierto y, en algunos casos, los presos eran libres de entrar y salir mientras observasen unas reglas básicas. Así, en 1655 en un informe del Tribunal de Granada se anotaba que a los presos se les permitía salir a la calle a todas las horas del día sin restricciones, debiendo volver a la cárcel sólo de noche. Otro ejemplo lo tenemos en Miguel de Cervantes. En el año 1575, cuando viajaba en la galera el Sol desde Nápoles hacia España, una flotilla de berberiscos turcos la abordó frente a las costas de Cataluña. Cervantes fue hecho prisionero y trasladado a Argel, donde fue encarcelado fijándose por sus captores un rescate de quinientos escudos de oro por su libertad; como cautivo de rescate, no tenía que realizar trabajos forzados, y se le permitía salir durante el día del presidio, o “baños” que era el nombre que se le daba a las prisiones, y que tiene su origen en el lugar (antiguos baños) en el que en la ciudad de Constantinopla tras su conquista por los turcos, se amontonaba a los cristianos, y recorrer las calles de la ciudad, eso sí, cargando con los grilletes. Su cautiverio lo describe en sus obras Los tratos de Argel y Los baños de Argel.

No tuvo un trato tan favorable el rey francés Francisco I, cuando tras caer prisionero en la batalla de Pavía en el año 1525 y trasladado a Madrid, fue encerrado por Carlos V en el Alcázar de los Austrias (donde hoy se ubica el Palacio Real), pues prácticamente no se le permitió salir de la celda durante los meses de su cautiverio (según el biógrafo Francis Hackett únicamente y de modo esporádico algún paseo en mula escoltado por sus carceleros) llegando a caer enfermo hasta el punto de temerse por su vida.

Avanzando hasta el siglo XIX, tenemos el ejemplo de Napoleón, cuando tras su derrota en Waterloo en 1815 fue deportado por los ingleses a la isla de Santa Elena, pues se permitió que le acompañasen amigos y aristócratas franceses, y al menos en los primeros meses de su estancia en la isla paseaba por ella sin restricción, aunque vigilado.

El primer antecedente próximo sobre la regulación de los permisos de salida, se encuentra en el Reglamento de los Servicios de Prisiones de 2 de febrero de 1956, claramente influenciado por las Reglas Mínimas de Ginebra de 1955, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente.; en efecto, el art. 44.2 de éstas preveía la obligación no sólo de informar al recluso inmediatamente del fallecimiento o de la enfermedad grave de un pariente cercano sino también de autorizar, cuando las circunstancias lo permitiesen, para que fuera a la cabecera del enfermo, solo o con custodia, lo que fue recogido en el citado Reglamento.

Sin embargo, pese al carácter tasado y cerrado de los supuestos de concesión, cabe señalar que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias autorizaba, en algunos casos, salidas para objetivos distintos de los señalados en el artículo 375, como por ejemplo asistencia a bodas o exámenes.

Posteriormente, pasaron a regularse, en la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979 y su Reglamento de 1981, derogado por el actual de 1996.

Pueden clasificarse los permisos en ordinarios y extraordinarios. Haciendo una apretada síntesis, cabe señalar:

A) Permisos Ordinarios:

Para su concesión, es necesario un informe previo del Equipo técnico del Centro Penitenciario, el cumplimiento por el interno de la cuarta parte de la pena que le ha sido impuesta, que se encuentre clasificado en segundo o tercer grado y que él mismo no observe mala conducta.

Su duración será de 36 o de 48 días anuales según que se trate de internos clasificados en segundo o en tercer grado, y que se distribuirá por semestres. Por otra parte, quedan excluidos de dicho cómputo tanto los permisos de fin de semana que disfrutaban los penados clasificados en tercer grado (régimen abierto), las salidas programadas por el Centro Penitenciario para actividades específicas, así como los permisos extraordinarios.

Se conceden por la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario, remitiéndose para su autorización al Juez de Vigilancia Penitenciaria si se trata de internos de segundo grado, y al Centro Directivo si lo son de tercer grado.

B) Permisos extraordinarios:

a) Proceden en los siguientes supuestos, y en su caso con las adecuadas medidas de seguridad:

1) Fallecimiento o enfermedad grave de padres, cónyuge, hijos, hermanos o persona íntimamente vinculada con el interno

2) Alumbramiento de esposa o conviviente

3) Otros motivos importantes de análoga naturaleza

4) Previo informe facultativo, y respecto de los penados clasificados en segundo y tercer grado, consulta ambulatoria hasta doce horas, o ingreso hospitalario hasta dos días

En general, las resoluciones judiciales han venido siendo favorables a una interpretación amplia, en lo que se refiere a motivos análogos.

b) Duración: Dependerá de su finalidad, pero en ningún caso podrá exceder del límite temporal de los permisos ordinarios.

c) Procedimiento: En general, se autorizan por la Dirección del Centro, salvo si el permiso se refiere a penados por delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales, o de duración superior a dos días, o penados clasificados en primer grado, en cuyos supuestos la autorización corresponde al Juez de Vigilancia Penitenciaria si se trata de internos clasificados en primer o segundo grado, y al Centro Directivo respecto de los de tercer grado.

Hay que recalcar, como aspecto positivo, acaso al principio contra todo pronóstico, el buen resultado de los permisos de salida. Ciertamente no se puede ocultar que cuando tras la Ley Orgánica General Penitenciaria comenzaron a otorgarse, los primeros que valoraron el riesgo que ello podía conllevar fueron las autoridades penitenciarias, las Juntas de tratamiento de los centros penitenciarios, y los Jueces y Fiscales de Vigilancia Penitenciaria, pero por fortuna no sucedió así. Ya se ha visto la decreciente proporción con el paso de los años de los quebrantamientos.

Ahora bien, también hay que decir que no es esto lo que importa a los medios de comunicación, sino que lo que es noticia es precisamente la excepción, es decir, el hecho de la fuga o comisión de un delito por un penado con permiso de salida. Es verdad que la fuga durante un permiso, y sobretodo si ello va acompañado de la comisión de un delito (como el caso del crimen de Alcáser) forzosamente ha de resultar una noticia relevante, mas ello no es obstáculo a que se haga ver a la ciudadanía que se trata de casos muy aislados dentro de la población reclusa que disfruta de tal beneficio.

EPILOGO:

Se acaba de ver, y ciertamente aterra el trato, la situación penitenciaria y sobretodo los castigos, más que condenas, que se imponían en épocas pasadas, y que por suerte se han ido desterrando de forma paulatina (con el paréntesis del horror de los campos de concentración o los Gulag), aunque como dicen los historiadores, las cosas hay que juzgarlas conforme a la mentalidad existente en cada momento.

Ha sido la evolución de las ideas, los logros de la ciencia, las relaciones entre los pueblos a través del comercio e intercambios, el avance de la cultura y su paulatina expansión lo que ha propiciado básicamente los cambios acaecidos en la humanidad, en los primeros siglos de una manera lenta y casi inapreciable, más relevantes a partir de la Edad Moderna (la difusión de la imprenta ha sido uno de los inventos trascendentes), y de manera más vertiginosa primero tras la Revolución francesa y la subsiguiente Revolución industrial, y de modo ya imparable en los siglos XX y XXI.

Humanistas como Erasmo o Vives, navegantes como Colón, Elcano o Vasco da Gama, ilustrados como Jovellanos, Campomanes o Feijoo, Montesquieu Diderot o Rousseau, científicos como Copérnico o Newton, Fleming, Pasteur o Madame Curie, han dejado un legado impagable.

Sin embargo, a pesar de ello las personas no han cambiado sustancialmente. Continúan existiendo los crímenes, si cabe con mayor virulencia, las conjuras y conspiraciones que estaban a la orden del día en la República romana, y que podemos observar en épocas sucesivas como en los reinos cristianos de la época de la

Reconquista, las intrigas que conllevaron el acceso al trono de Isabel de Castilla, las habidas en la casa de Austria o los Tudor, por poner algunos ejemplos, no es algo extraño en esta época, como tampoco lo son las ansias de poder, que tantas guerras han provocado en el pasado, como las de religión en las que las creencias eran en no pocos casos el simple motivo que enmascaraba la codicia de gobernantes y de Papas. Otro tanto cabe decir de las ansias de riqueza, ¿en qué se diferencia el atesoramiento que innumerables reyes o nobles lograban a costa del pueblo llano, con los cada día más extendidos casos de malversación de fondos públicos?

Es claro que no hemos aprendido, prueba evidente son las dos guerras mundiales que hemos dejado a la vuelta de la esquina. El paraíso terrenal que prometía el comunismo, en un mundo donde no habría pobres ni ricos, resultó un estrepitoso fracaso, entre otras razones porque sus dirigentes se erigieron en nuevos zares.

Entonces, si la condición humana es la que es, y si en el devenir de los tiempos seguimos cometiendo los mismos errores, si esencialmente nuestro comportamiento global no ha variado, ¿tendríamos que dar la razón a Hobbes y entender que el pacto social de poco ha servido?

¿Qué podemos opinar de las resoluciones de las Naciones Unidas, que se ejecutan según qué país sea el afectado, y donde existen países con derecho de veto y otros no? Esto cuando menos ha de inquietar a la conciencia universal.

Así pues, ¿qué decir del sistema penitenciario, cuyo fin entre otros debería ser la reducción del número de delitos y la reeducación social?

La historia, pues, nos demuestra que acaso es el sistema menos malo, pero que no ha resultado idóneo para erradicar la transgresión de la ley.

No lo fueron las ejecuciones públicas, con las que se pretendía que sirvieran como disuasorias, ni los horribles castigos y torturas infligidos como pena, ni en definitiva los modernos sistemas penitenciarios que han intentado en un primer momento el arrepentimiento del penado, y más adelante su rehabilitación. En nuestro país, el aumento de la población reclusa, como en los de nuestro entorno, es un hecho, como lo es, con algún altibajo, el de los delitos cometidos.

¿Cabe otra solución?

Lo cierto es que la Administración Penitenciaria, los Directores de los centros penitenciarios, criminólogos, educadores, psicólogos, trabajadores sociales, funcionarios, etc, no regatean esfuerzos en la atención penitenciaria debida a los internos, no pudiendo olvidar otras instituciones como Proyecto Hombre, que colaboran de continuo trabajando en la deshabitación de toxicómanos. Los que hemos ostentado el cargo de Jueces de Vigilancia Penitenciaria podemos dar fe de ello. Con todo, no puede dejarse de lado que los resultados en orden a la rehabilitación no son en general lo que pudiere esperarse, entre otras razones porque muchos penados, cuando salen en libertad vuelven a su medio y precisan de un apoyo que no siempre encuentran, y con casi nulas oportunidades de hallar un trabajo, lo que aboca a la reincidencia en numerosas ocasiones.

En los últimos tiempos se ha abogado por la sustitución de las penas cortas de prisión, lo que resulta sumamente razonable y práctico. La reparación por el delito no tiene por qué pasar necesariamente por el ingreso en prisión, lo que sucede es que en la práctica las multas o los trabajos en beneficio de la comunidad no resultan todo lo operativos que pudiera desearse; las primeras, porque el penado puede resultar insolvente, los segundos, porque la Administración apenas facilita trabajos suficientes, no faltando quienes afirman que dependiendo de la actividad a desarrollar, en algunos casos la misma podía ser realizada por personas en situación de desempleo.

Lo que sí debería potenciarse es el arresto domiciliario (localización permanente), actualmente bastante limitado, pues la objeción que siempre se ha puesto a la eficacia de su control, puede paliarse con los dispositivos telemáticos existentes en la actualidad.

En suma, la solución que podía llamarse menos mala, podría ser la limitación del cumplimiento en prisión para los delitos graves, los cometidos por delincuentes peligrosos o multirreincidentes, o por quienes padecen graves trastornos psíquicos (en estos casos habría que potenciar las unidades terapéuticas de los centros penitenciarios así como la creación de hospitales psiquiátricos penitenciarios), y también los delitos que provocan alarma social.

Ha de tenerse en cuenta, que muchas son las ocasiones en las que legisladores y aplicadores del Derecho no conectamos con el sentir y la opinión del ciudadano, y por aludir a uno de los supuestos más destacables, los casos de corrupción que a todos los niveles se ha instalado en los últimos tiempos, máxime cuando las ingentes cantidades defraudadas repercuten en las arcas públicas, proceden de nuestros impuestos, o nos abocan a un esfuerzo más en esta época de crisis.

Como ha afirmado Legaz Lacambra, el Derecho existe por causa del hombre, y está al servicio del hombre, y como señala Ehrlich, la sociedad es el claustro materno del derecho, en constante alumbramiento.

Si escuchamos la opinión de la sociedad, ésta demanda básicamente en tales casos un endurecimiento de las penas de prisión, y sobretodo que los autores de estos delitos no alcancen la libertad ni beneficios penitenciarios hasta que devuelvan lo que han sustraído, por lo general desviado hacia paraísos fiscales.

De momento, el art. 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria permite vedar la progresión al tercer grado de tratamiento en estos casos, debe pues aplicarse sin paliativos, y por su parte, el legislador no debería restar esfuerzos dentro de la legalidad en atender la demanda social, siquiera para la previsión de penas ejemplares.

La evolución de las cosas, del pensamiento, de lo que las leyes y su aplicación no son una excepción, las ha de marcar la sociedad. Cuando entre ambas no existe concordancia, puede afirmarse con contundencia que las normas no son adecuadas. Pero también debe tenerse en cuenta que ha de tratarse de una sociedad con sentido común de las cosas, donde el mutuo respeto y la tolerancia han de estar presentes.

Los centros penitenciarios seguirán existiendo, y si logramos algún día al menos reducir las desigualdades entre los países y sus gentes, desterrar la codicia, e interiorizar

una escala de valores adecuada, podremos decir no que aquéllos son historia, pero sí que su número habrá disminuido de manera apreciable.

Pensar en su abolición, debemos verlo hoy por hoy como una utopía, pues no parece que vaya a existir el país que en su obra nos describe Tomás Moro.

Bibliografía:

Ley Orgánica General Penitenciaria

Reglamento Penitenciario

Código Penal

Circular de la DGIP de 2-4-2012

La Inquisición Española, Henry Kamen

Historia de las prisiones, Faustino Godín

La Arquitectura penitenciaria en Asturias: José Ramón Alonso Pereira